

EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES EN LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN BOLIVIA

————— Editorial —————

Hablar sobre la investigación arqueológica en Bolivia es referirse a una larga lucha por la consolidación de espacios de investigación en el ámbito nacional y local ante la casi completa indiferencia no sólo del Estado boliviano sino también de la sociedad nacional en su conjunto. Para poder entender el contexto en que la investigación arqueológica nacional se desenvuelve y el rol de las universidades en ella debemos remitirnos a la historia de su desarrollo.

La investigación arqueológica en Bolivia se remonta a fines del siglo XIX, cuando distintas misiones extranjeras y viajeros iniciaron los primeros trabajos serios sobre el tema. Sin embargo, recién desde los años 1930 con la aplicación de estudios más rigurosos y sistemáticos es que se comienza a sentar las bases para el desarrollo de una arqueología en Bolivia. Sin duda, el aporte de investigadores extranjeros como Wendell Bennett, Stig Rydén y Dick E. Ibarra Grasso fue crucial en este sentido, pero no debemos desconocer el importante trabajo de investigadores nacionales como Max Portugal Zamora, Gregorio Cordero y muchos otros que realizaron una importante aunque poco difundida labor de identificación, documentación, protección y difusión de sitios arqueológicos.

No es sino hasta la década de los años 50 que, junto con el proyecto ideológico-político del MNR y la Revolución Nacional, se crea un espacio para el avance de una arqueología nacional hecha principalmente por bolivianos. En este contexto, y tal vez por única vez en la historia del país, el desarrollo de la arqueología dentro de un marco institucional estatal recibió un fuerte apoyo creándose centros de investigación arqueológica en varios departamentos, apoyándose las publicaciones de investigadores nacionales y financiándose trabajos arqueológicos a gran escala como, por ejemplo, las excavaciones en el área monumental de Tiwanaku implementadas a partir de 1958. Sin embargo, una de las debilidades mayores de este programa fue no concretar la creación de una carrera profesional de arqueología que permitiese la formación de arqueólogos que pudiesen hacerse cargo de tareas de investigación y generación de políticas destinadas a consolidar una arqueología boliviana sostenible en el largo plazo.

En 1975 se creó el Instituto Boliviano de Cultura (IBC) y, bajo su dependencia, el Instituto Nacional de Arqueología (INAR) cuyo trabajo estuvo fuertemente marcado por el impulso y carácter de Carlos Ponce Sanginés, que fue su fundador y primer director. La salida de Ponce de esta institución marcó una crisis para la investigación arqueológica boliviana debido a que,

desde ese momento (comienzos de los años 80), se fue acrecentando el desinterés de las autoridades gubernamentales en apoyar todo lo relacionado al quehacer cultural y particularmente al arqueológico. Esto se hizo patente en las consecutivas disminuciones presupuestarias para actividades de investigación, protección y administración del patrimonio arqueológico nacional, extinguiéndose desde entonces todas las iniciativas para políticas públicas de largo plazo a favor del patrimonio arqueológico, la promoción de su investigación y su normativa.

En 1984, se crea la Carrera de Antropología-Arqueología en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, en medio de intereses encontrados dentro de una estancada arqueología boliviana. Esta apertura permitió la creación de un espacio para la formación profesional de arqueólogos lo que por ende, repercutió en la investigación arqueológica que se realiza en el país. En estos 23 años algo más de 30 arqueólogos obtuvieron sus títulos profesionales y sólo un tercio de ellos han profundizado sus estudios en esta disciplina con postgrados, existiendo actualmente unos 60 egresados que necesitan culminar sus tesis para obtener el título que les permita ejercer la profesión. No obstante, tanto profesionales como estudiantes han tenido parte importante en el desarrollo de investigaciones en distintas partes del territorio nacional.

Si bien, en este contexto, se podría pensar que se están sentando las bases para contar con una arqueología propiamente boliviana con perspectiva de consolidación, crecimiento, especialización y diversificación, esta se ve grandemente afectada por la carencia de una política nacional y de acciones concretas en torno al patrimonio arqueológico en general, su protección, conservación, aprovechamiento, investigación y difusión. Este aspecto se observa en todos los niveles gubernamentales de decisión ya sean sectoriales o territoriales así como en las entidades especializadas en educación e investigación superior.

No obstante, en la actualidad varias de las universidades del sistema público cuentan con museos universitarios e institutos de investigación que están relacionados, en distintos grados, con la investigación arqueológica y su difusión. Entre los más sobresalientes se encuentran el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo Arqueológico de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba que, desde hace 56 años, se destaca por realizar trabajos de investigación arqueológica, antropológica y estudios sobre el patrimonio histórico de Cochabamba y difundir estos trabajos mediante publicaciones. En los últimos años ha venido desarrollando acciones regionales para generar ciertos mecanismos de sensibilización, protección del patrimonio arqueológico regional así como su gestión. El Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, de reciente creación, se halla en un proceso de consolidación y viene desarrollando proyectos de investigación, algunos de los cuales tienen lugar en el departamento de Oruro. También está el Museo Antropológico y Centro de Investigación Arqueológica de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca que desarrolla investigaciones y difusión de resultados a través de una serie de publicaciones.

A pesar de los importantes aportes realizados por dichas instituciones, la mayor parte de ellas aún no participan activamente en temas vinculados con la generación e implementación de normas y políticas relacionadas con la investigación, protección y conservación del patrimo-

nio arqueológico a nivel regional y nacional. Las universidades, por su función educativa y de investigación, son las instancias llamadas a desarrollar una posición mucho más protagónica y crítica en lo que respecta a estos temas en un diálogo continuo con las instancias gubernamentales, departamentales y locales respectivas. Debido a la importancia que tiene la arqueología en un país tan diverso y culturalmente rico como el nuestro, se hace indispensable que las universidades desde sus niveles mayores de decisión apoyen su desarrollo y consolidación generando condiciones económicas adecuadas y captando recursos humanos con sólida formación que lleven adelante estas importantes tareas.